

MINUTA INFORMALIDAD DEL MERCADO LABORAL

El mercado laboral chileno enfrenta desafíos complejos y estructurales que afectan su desarrollo y sostenibilidad. A pesar de algunos avances económicos, la precariedad y la informalidad siguen siendo características predominantes, impactando de manera significativa la cobertura de seguridad social y la calidad de vida de los trabajadores. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la tasa de empleo informal en Chile se sitúa en un 27,6%, lo que indica que más de un cuarto de la fuerza laboral opera sin acceso a los beneficios y protecciones básicas que ofrece un empleo formal. Este fenómeno es particularmente relevante en regiones como el Maule, cuya economía se caracteriza por la alta dependencia de la agricultura estacional y la temporalidad de sus empleos.

Antecedentes

Chile ha experimentado un crecimiento económico notable en las últimas décadas, pero este desarrollo no ha sido homogéneo en todos los sectores de la sociedad. El mercado laboral chileno aún refleja desigualdades significativas, y la informalidad es uno de los mayores obstáculos para el progreso. Según datos proporcionado por el INE, la informalidad laboral afecta a más del 27% de los trabajadores del país. Este porcentaje implica que una porción significativa de la población activa no tiene acceso a beneficios como la seguridad social, el seguro de salud y las cotizaciones previsionales, lo que limita la protección en caso de enfermedad, accidente o jubilación.

La Ministra del Trabajo, Jeannette Jara, ha destacado que la informalidad laboral no solo es un problema social, sino un desafío estructural para la economía chilena. Esta situación se traduce en una menor recaudación fiscal, menor inversión en capital humano y un menor acceso a pensiones dignas. El centro de estudios económicos Clapes UC, ha señalado que el crecimiento del empleo interanual en el período 2023-2024 se atribuye en un 60% a la creación de empleos informales, lo que subraya la gravedad del problema.

Realidad local en la región del Maule

La región del Maule presenta una situación singular dentro de la realidad laboral del país. Conocida por su alta dependencia de la agricultura y la producción de productos agroexportadores como frutas y vino, el Maule experimenta una marcada estacionalidad en su mercado laboral. Durante los períodos de cosecha, la demanda de mano de obra se incrementa significativamente, pero estos empleos son en su mayoría temporales y, a menudo, informales. El INE ha informado que en las

temporadas de mayor actividad agrícola, la tasa de informalidad en la región supera incluso la barrera del 40%, cifra absolutamente preocupante y muy por encima del promedio nacional.

Esta alta informalidad se debe a múltiples factores, entre los que se encuentran la falta de incentivos para la formalización de contratos laborales, la prevalencia de pequeños y medianos productores que no pueden o no quieren asumir los costos de la formalización, y la escasa fiscalización en las zonas rurales. Como resultado, miles de trabajadores quedan excluidos del sistema de seguridad social, sin acceso a las prestaciones de salud o pensiones, lo que los deja en una situación de alta vulnerabilidad.

El impacto de esta realidad no es solo social, sino que afecta el desarrollo económico de la región. La informalidad perpetúa un ciclo de baja productividad, ya que las empresas que operan fuera de la legalidad tienden a no invertir en la capacitación de sus trabajadores ni en la adopción de nuevas tecnologías. Esto impide que el Maule y otras regiones con economías similares alcancen un crecimiento sostenido y competitivo.

Causas de la precarización laboral en el Maule

Las causas de la precarización e informalidad laboral en la región del Maule se pueden dividir en estructurales y coyunturales. Entre las causas estructurales destacan:

1. **Dependencia de la agricultura estacional:** La agricultura es una actividad económica que, por su propia naturaleza, depende de ciclos de producción. Los empleos generados en la región son mayoritariamente temporales, lo que dificulta la creación de contratos formales de largo plazo.
2. **Falta de incentivos y regulaciones:** Los agricultores pequeños y medianos enfrentan barreras significativas para cumplir con las obligaciones laborales, como la inscripción de trabajadores en el sistema de previsión social.
3. **Escasa fiscalización:** Las áreas rurales del Maule tienen una baja presencia de organismos fiscalizadores, lo que permite que prácticas laborales informales prosperen sin consecuencias.

En el plano coyuntural, la región ha experimentado problemas económicos derivados de factores como la pandemia del COVID-19 y la desaceleración de la economía global, lo que ha exacerbado la precarización laboral. Estos factores han impulsado a empleadores y trabajadores a buscar alternativas fuera del marco regulatorio, fomentando la informalidad.

Efectos de la informalidad laboral

La informalidad laboral tiene un impacto profundo tanto en la economía como en la sociedad chilena. Desde un punto de vista social, los trabajadores informales no cuentan con derechos laborales básicos ni con la estabilidad que proporciona un contrato formal. Esto los deja expuestos a condiciones de trabajo más precarias y a la falta de cobertura en caso de enfermedad o accidente. Además, la falta de cotizaciones previsionales tiene un efecto directo en la capacidad de estos trabajadores de recibir una pensión adecuada en el futuro.

Según reporta la Superintendencia de Pensiones, los trabajadores informales contribuyen de manera irregular o no contribuyen en absoluto al sistema de pensiones. Esta realidad se traduce en pensiones bajas o inexistentes, lo que a largo plazo aumenta la carga fiscal del Estado, que debe destinar más recursos a programas de apoyo para la tercera edad.

Desde un punto de vista económico, la informalidad limita el crecimiento y la competitividad. Las empresas que operan de manera informal suelen ser menos productivas, ya que no invierten en la capacitación de sus trabajadores ni en mejorar sus procesos. Esto afecta negativamente al Producto Interno Bruto (PIB) y reduce la capacidad del Estado para financiar políticas públicas y programas sociales a través de la recaudación tributaria.

Nueva Ley de Cumplimiento de Obligaciones Tributarias

En un intento por abordar el problema de la informalidad, el Gobierno ha implementado la Ley de Cumplimiento de Obligaciones Tributarias. Esta ley tiene como objetivo incentivar la formalización de actividades económicas a través de una mayor fiscalización y la obligatoriedad de declarar ingresos. La génesis de esta ley radica en la necesidad de combatir la evasión fiscal y de integrar al sistema formal a aquellos sectores que operan en la economía sumergida.

La ley establece mecanismos para que los contribuyentes declaren sus ingresos de manera más transparente, lo cual se espera que impulse a las pequeñas y medianas empresas a formalizar sus operaciones. Esto, a su vez, podría tener un efecto positivo en la generación de empleos formales, proporcionando a los trabajadores acceso a beneficios y protecciones legales.

Sin embargo, la implementación de esta ley requiere un equilibrio cuidadoso para no sobrecargar a los pequeños productores y emprendedores, quienes pueden enfrentar dificultades para adaptarse a nuevas regulaciones. Por lo tanto, es

fundamental que el Gobierno y las instituciones correspondientes ofrezcan apoyo y capacitaciones para facilitar la transición hacia la formalidad.

Propuestas para un plan de acción

Abordar la informalidad laboral en Chile y en la región del Maule requiere un enfoque integral que combine la acción del Gobierno, el sector privado y el Congreso. Algunas medidas propuestas incluyen:

1. **Fomentar programas de formalización:** Incentivar a las pequeñas y medianas empresas a formalizarse mediante subsidios y beneficios fiscales temporales que les permitan adaptarse a las regulaciones.
2. **Fortalecer la fiscalización:** Aumentar la presencia de organismos fiscalizadores en áreas rurales y mejorar los mecanismos de denuncia para proteger a los trabajadores.
3. **Capacitación y educación:** Implementar programas de capacitación para empleadores y trabajadores que expliquen los beneficios de la formalización y las obligaciones legales.
4. **Apoyo al trabajador temporal:** Crear un sistema de seguridad social adaptado a las necesidades de los trabajadores temporales, que permita cotizaciones flexibles y cobertura en períodos de inactividad.
5. **Reformas legales:** Proponer cambios en la legislación laboral que se ajusten a las realidades de sectores como la agricultura, permitiendo contratos que se adapten mejor a la estacionalidad sin perder la formalidad.

La informalidad laboral es un desafío multifacético que requiere un abordaje integral y coordinado. La región del Maule, con su dependencia de la agricultura estacional, refleja claramente la urgencia de implementar medidas que fomenten la formalización y protejan a los trabajadores. Las cifras y estudios demuestran que la informalidad afecta tanto a la recaudación fiscal como a la estabilidad económica y social del país. La nueva Ley de Cumplimiento de Obligaciones Tributarias es un paso en la dirección correcta, pero debe complementarse con un plan más amplio que incluya incentivos, apoyo y reformas legales. Solo a través de un enfoque colaborativo se podrá reducir la informalidad y construir un mercado laboral más justo y sostenible para todos.

MINUTA PROYECTO DISMINUCIÓN BUROCRÁTICA EN LA PERMISOLOGÍA

Chile enfrenta un periodo desafiante en cuanto a crecimiento económico, influenciado tanto por factores globales como internos. A nivel internacional, los efectos de la pandemia de COVID-19, la volatilidad de los mercados, la guerra en Ucrania y la alta inflación han impactado negativamente en las economías de todo el mundo. Estos elementos han debilitado el comercio exterior y la inversión extranjera directa, pilares tradicionales del crecimiento chileno.

En el ámbito local, la situación no es menos compleja. Chile ha experimentado una desaceleración económica que se refleja en un bajo crecimiento del PIB y una disminución en la tasa de inversión. El Banco Central de Chile proyectó un crecimiento del PIB de apenas un 0,5% a 1,5% para el presente año 2024, una cifra que contrasta con el crecimiento promedio que nuestro país venía experimentando en las últimas décadas. La incertidumbre política y las reformas estructurales han contribuido a que los inversionistas adopten una postura de cautela, manteniendo stand by una serie de proyectos altamente atractivos para el país.

Uno de los principales factores que han influido en la disminución de la inversión es la excesiva burocracia y los procesos lentos de obtención de permisos. Según datos de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), un proyecto de inversión en Chile puede enfrentarse a un promedio de 200 permisos y autorizaciones antes de recibir luz verde, lo que puede desarrollarse en un horizonte de tiempo que alcanza hasta 28 meses. Esta situación contrasta con países como Colombia o Perú, donde los tiempos de tramitación son considerablemente más cortos, entre 12 y 18 meses en promedio.

El impacto de esta burocracia se refleja en la pérdida de competitividad de nuestro país frente a estos otros países de Latinoamérica. La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) ha señalado que el exceso de tramitaciones es uno de los factores que desalientan la inversión privada, afectando la creación de empleos y el desarrollo económico. Clapes UC, organismo de estudios económicos, ha indicado que los retrasos en los procesos administrativos y la incertidumbre sobre la viabilidad de los proyectos tienen un impacto negativo en la atracción de capital, afectando especialmente a sectores clave como la minería, la construcción y la infraestructura.

Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales

El Gobierno, consciente de estas limitaciones, ingresó en enero de 2024 a la Cámara de Diputados el proyecto de la 'Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales'. Esta iniciativa busca atacar de manera directa los problemas de la burocracia estatal y agilizar los procesos de aprobación de permisos necesarios para el desarrollo de proyectos de inversión, tanto públicos como privados.

El objetivo principal del proyecto es reducir los tiempos de tramitación de permisos sectoriales en al menos un 30% y hasta un 70% en algunos casos. La ley busca simplificar la tramitación sin comprometer los mecanismos de protección al medio ambiente y la seguridad de las personas. Para lograr este objetivo, el proyecto introduce varias medidas clave:

1. **Reemplazo de ciertos permisos por declaraciones juradas:** Esta medida se aplicará principalmente a proyectos de bajo riesgo, permitiendo a los inversionistas avanzar en sus iniciativas presentando declaraciones que certifiquen el cumplimiento de requisitos. Esto reduce los tiempos y simplifica el proceso sin poner en riesgo la fiscalización futura.
2. **Implementación de una ventanilla única digital:** La creación de un sistema de tramitación centralizado y digitalizado permitirá a los inversores solicitar permisos y seguir el estado de sus procesos de manera más eficiente. Esta plataforma mejorará la transparencia y reducirá la duplicación de esfuerzos entre organismos.
3. **Plazos máximos y silencio administrativo:** Se establecerán plazos claros para la entrega de informes intersectoriales. En caso de que los organismos no respondan dentro de estos plazos, se aplicará el principio de silencio administrativo positivo, otorgando automáticamente la aprobación del permiso solicitado. Este enfoque incentiva la eficiencia en la administración pública.
4. **Categoría de proyectos priorizados:** Se introducirá una clasificación especial para ciertos proyectos de alto impacto, que tendrán plazos aún más acotados para su tramitación. Esto beneficiará proyectos de inversión estratégica que generen empleo y fomenten el desarrollo económico. El impacto esperado de estas reformas, según el Gobierno, es una reducción del tiempo total de tramitación en al menos un 30%, lo cual podría traducirse en un aumento del PIB de un 2,4% en un plazo de 10 años y un incremento en la recaudación fiscal del 0,27% del PIB de 2023 debido al adelantamiento de flujos de inversión.

Recientes modificaciones

El proyecto impulsado por el Ejecutivo ha sido objeto de diversas modificaciones durante su discusión en la Cámara de Diputados. Una de las incorporaciones más relevantes es la inclusión de un sistema de sanciones para los funcionarios que no cumplan con los plazos establecidos para la entrega de autorizaciones. Esta medida busca garantizar el cumplimiento de los plazos y reducir la ineficiencia en la administración pública.

Se proponen multas económicas para los funcionarios que no cumplan con los plazos de respuesta estipulados. Las sanciones varían en función de la gravedad del incumplimiento, con montos que van desde un porcentaje de su salario mensual hasta la posibilidad de suspensiones laborales. Esta medida ha generado un debate entre los expertos, algunos de los cuales argumentan que podría desincentivar el trabajo en ciertos cargos públicos si no se asegura una dotación adecuada de recursos y personal capacitado.

La propuesta establece plazos que oscilan entre 60 y 120 días para la aprobación de permisos sectoriales, dependiendo de la complejidad del proyecto. Si los funcionarios incumplen estos plazos sin una justificación documentada, se activaría el mecanismo de sanciones mencionado. Expertos del Instituto Libertad y Desarrollo (LyD) han advertido que si bien estas medidas son necesarias, también resulta fundamental acompañarlas con una modernización de las capacidades tecnológicas y humanas de los organismos públicos.

El Ministro de Economía en declaraciones recientes, ha insistido en que este proyecto es parte integral del Pacto por el Crecimiento Económico, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal, y forma parte de los compromisos del Gabinete Pro Crecimiento y Empleo, y que no solo busca agilizar procesos, sino también fortalecer la colaboración entre el sector público y privado, generando condiciones más favorables para la inversión.

Conclusiones

El proyecto de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales es una respuesta necesaria para enfrentar las barreras burocráticas que han afectado el desarrollo de la inversión en Chile. Las cifras de la CChC y los estudios de Clapes UC demuestran que la reducción de los tiempos de tramitación pueden tener un efecto positivo directo en la economía, aumentando la inversión y mejorando el mercado laboral. Sin embargo, para que estas medidas sean efectivas, es crucial que vayan acompañadas de una modernización de la gestión pública y una capacitación constante de los funcionarios. En un contexto donde Chile busca revitalizar su economía y competir

en un escenario global cada vez más exigente, esta ley representa un paso adelante hacia la simplificación administrativa y la atracción de inversiones.

Con la implementación adecuada y el compromiso de todos los actores involucrados, esta normativa podría ser una herramienta clave para fomentar el desarrollo económico y social en el país. Este proyecto, alineado con las estrategias de desarrollo y los compromisos internacionales de Chile, refuerza la necesidad de un equilibrio entre la eficiencia administrativa y la protección de los intereses públicos, asegurando que los avances en productividad no se hagan a costa del medio ambiente o la seguridad de las personas.